

El Gobierno acusa a Feijóo de preparar como Trump la deslegitimación de las elecciones

El PP dice ahora que no cuestiona la 'ley de nietos' ni el derecho de quienes descienden de exiliados a la nacionalidad, sino cómo la aplica Sánchez

PAULA DE LAS HERAS/
MARÍA EUGENIA ALONSO
Madrid

El Gobierno sostiene que Alberto Núñez Feijóo está preparando el terreno para sembrar dudas sobre la limpieza de las próximas generales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, atribuyó este miércoles a ese objetivo las críticas planteadas tanto por el líder de la oposición como por Vox —el primero en salir al ataque— por la aplicación de la llamada 'ley de nietos'. El PP, que el lunes acusó a Sánchez de hacer «ingeniería electoral» para «fabricar votantes», asegura ahora que en ningún caso cuestiona la norma en sí, sino la «opacidad» y la «urgencia» con la que se está aplicando. Y prepara ya una ofensiva parlamentaria para fiscalizar el proceso de nacionalización y seguir apretando con el asunto.

El argumento de fondo de PP y Vox es que el elevado aumento del censo exterior producido por la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —que reconoce el derecho a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse a causa de sus ideas políticas, religiosas o de su orientación sexual durante la Guerra Civil y el franquismo— está orientado a intentar favorecer electoralmente al PSOE. Feijóo cifró hace dos días esa variación en «2,5 millones de personas en año y medio». El Ejecutivo asegura que el líder del PP es consciente de que está difundiendo un bulo y lo tacha de irresponsable.

Según los datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque se registraron 2,4 millones de peticiones de citas, entre octubre de 2023 y octubre de 2025, cuando acabó el plazo, se habían llegado a presentar 1,2 millones solicitudes en las oficinas consulares; es decir, la mitad. Y de esas solicitudes se ha reconocido ya el derecho a acogerse a la ley 544.722 personas, pero efectivamente inscritas hay todavía solo 306.000. «Lo que hacen el PP y Vox es una técnica ultraderechista muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo», denunció Bolaños. «Esta película y este bulo ya lo hemos vivido».

El ministro de Justicia aludió así no solo a las dudas planteadas ya por el PP en 2023 sobre el sistema de voto por correo a raíz de un goteo de casos reales pero muy concretos, sino a la campaña orquestada



Imagen de la toma del Capitolio en 2020 por seguidores de Trump a la que recurrió ayer el ministro Bolaños. AFP

por Donald Trump cuando el demócrata Joe Biden le ganó las elecciones en 2020 y una horda de lo más variopinto asaltó el Capitolio. «Solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta», ironizó Bolaños.

Bolaños acusó a Feijóo de someterse a la «derecha salvaje» de Vox, pero su acusación al partido de Santiago Abascal fue aún más severa. «Está pidiendo suprimir la democracia a millones de españoles, en con-

creto a todos los que no viven en España. Esto es peligrosísimo», dijo, en referencia a las propuestas del partido de eliminar el voto exterior. «Imagino que es el primer paso para suprimir el voto a todo el mundo, que

«Solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes», ironiza Bolaños sobre la invasión del Capitolio

será su sueño, pero España —advirtió— es una democracia».

Entre las razones que utiliza el Gobierno para sostener que el PP no pretende más que embarrar el terreno de juego está, precisamente, el hecho de que los populares sí entraron a enmendar la disposición de la 'ley de nietos' pese a que acabaron votando 'no' a la de Memoria Democrática. La portavoz popular en la Cámara baja, Ester Muñoz, replicó que, aun siendo eso cierto, «cinco días después» la ley fue «reinterpretada» mediante una instrucción de la entonces directora general de Seguri-

dad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente; y que esa instrucción amplió el alcance más allá de lo votado. El titular de Transportes replicó que los populares y Vox se dedican a una política de «señuelos y de miedo».

Ofensiva de los populares

En el primer partido de la oposición tratan de orillar las críticas y pondrán toda la maquinaria a trabajar para tratar de fiscalizar un proceso de nacionalización en el que «apenas se exigen documentación ni garantías». Para ello, han activado una ofensiva parlamentaria. Este jueves registrarán una batería de iniciativas para «exigir transparencia y todo tipo de garantías jurídicas y políticas» sobre el procedimiento y obtener respuesta escrita por parte del Gobierno, además de solicitar la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Los populares quieren que éste informe, entre otras cosas, del funcionamiento de los registros civiles consulares, del sistema de cita previa, de los plazos de resolución de expedientes, así como del número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y de las que están pendientes. Albares reclamó este mismo miércoles a Feijóo «disculpas públicas» hacia la carrera diplomática y el servicio exterior de España por sembrar dudas sobre el procedimiento.

El PP no pone en duda el trabajo desempeñado por los consulados, pero no entiende las «prisas» del Gobierno por haber decidido, incluso, subcontratar empresas en países de Latinoamérica —en Cuba lo ha hecho con el Grupo Palco, vinculada al régimen castrista— para atender y tramitar el elevado volumen de solicitudes. Los conservadores exigen a Albares que informe de las «medidas previstas por el Gobierno ante la saturación de los servicios consulares» y reclaman a la Abogacía General del Estado un informe sobre esa externalización para realizar labores de apoyo a los legaciones diplomáticas.

En este sentido, el PP solicita la copia de los expedientes completos de contratación de Grupo Palco en La Habana, por importe total de 1.602.217 euros, y de Ineco en España para realizar labores de apoyo en la tramitación de expedientes. En la dirección nacional aseguran que su intención pasa por garantizar que «el proceso iniciado por el Ejecutivo por la puerta de atrás» —en alusión a la Instrucción dictada por Justicia— «se haga con todas las garantías, informando al conjunto de los ciudadanos a través del Parlamento». «Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley», zanja el primer partido de la oposición.